



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

ATL1943-2021

Radicación n.º 95689

Acta 45

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Sería del caso resolver la impugnación que **HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO** presentó contra la sentencia que la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN** emitió el 26 de octubre de 2021, dentro de la acción de tutela que el recurrente promovió frente a la **SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA** y la **DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA**, trámite en el que dispuso la vinculación del **JUEZ ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, de no advertirse configurada una causal de nulidad que invalida lo actuado.

I. ANTECEDENTES

El promotor del resguardo instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales *«a la salud, el mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada»*, presuntamente conculcados por la autoridad convocada.

Como fundamento fáctico de su pretensión, el accionante expuso, que ejerce el cargo de «citador», en provisionalidad, en el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, desde el mes de julio de 2014.

Relató que, actualmente se encuentra en estado de *«discapacidad física y sensorial»* y que está *«incapacitado desde el día 10 de enero de 2021, fecha en la cual sufr[ió] un coma diabético, seguido de un derrame pleural en el pulmón derecho efecto POS COVID19 sufrido en el mes de septiembre de 2020, tal y como se encuentra acreditado en el Área de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia»*.

Comentó que ha sufrido de *«múltiples complicaciones por enfermedades de base (diabetes mellitus, síndrome nefrótico e hipertensión) y que a la fecha [le] siguen generando incapacidad continua»*.

Afirmó que todas las incapacidades laborales las ha tramitado por el conducto regular y que, *«incluso cuando cumpl[ió] los 180 días de incapacidad la dependencia de Recursos Humanos-Tesorería de la Administración Judicial, emitió el acto administrativo correspondiente para que su pago se siguiera efectuando por el Fondo de Pensiones»*.

Arguyó que, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, expidió el ACUERDO No. CSJANTA21-91 de 17 de septiembre de 2021 *«[p]or medio del cual se conforma lista de candidatos para proveer cargos de Citador de Juzgado de Circuito grado 3 (Código 260112) en la Rama Judicial Seccional Antioquia – Convocatoria 4»* y que dicho listado se le remitió al titular del despacho en el que laboral mediante comunicación CSJANTOP21-1006, el 11 de octubre de 2021.

En criterio del tutelante, la accionada lesiona sus garantías superiores, porque si bien es cierto, el aludido acto administrativo es el resultado de un proceso de selección por concurso de méritos, *«también lo es que en [su] caso específico [se] encuentr[a] en una situación de debilidad física y sensorial manifiesta a la luz de lo consagrado en la Ley 361 de 1997, y su interpretación a partir de la sentencia de la Corte Constitucional C-531-2000, conforme a la cual existe una estabilidad laboral reforzada, y que, a su juicio, la situación revelada «le impedía a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Antioquia elaborar la lista de elegibles para el cargo de Citador, o al menos condicionar la designación y el nombramiento de la persona que ocupe el primer lugar, hasta tanto [su] situación de salud se defina».*

Conforme a lo anterior, solicitó *«que se [le] brinde protección a los derechos fundamentales, especialmente el de la seguridad social integral, y la estabilidad laboral reforzada, hasta tanto se obtenga un diagnóstico definitivo de [sus] patologías físicas y sensoriales, y se tramite el proceso de calificación de la pérdida definitiva de capacidad laboral».*

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Mediante proveído de 21 de octubre de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, admitió la acción de tutela instaurada por el quejoso, y ordenó enterar las accionadas y juez vinculado, para que se pronunciaran frente a los hechos que motivaron la solicitud de amparo constitucional.

Dentro del término concedido, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, informó que consolidó la lista de elegibles para el cargo de citador del juzgado del circuito, con las personas que superaron de manera satisfactoria las etapas de la convocatoria n.º 04 y la comunicó al despacho pertinente el pasado 11 de octubre de 2021. Asimismo, anotó que la determinación de nombramiento y desvinculación le compete al juez nominador, a quien le corresponde *«la ponderación de los principios en pugna y tome en consecuencia la decisión correcta»*.

Por su parte, el Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, manifestó que conoce del estado de salud del accionante y que desde el pasado 19 de octubre del año que avanza, informó la situación a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. A su vez, explicó que solo hasta el mes de septiembre retomó el cargo en el despacho que dirige, y que su antecesor omitió informar del delicado estado de salud que aquí se expone.

A su turno, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, expuso que en la

actualidad el accionante continúa vinculado y que la determinación de retirarlo del cargo o no, corresponde al juez nominador.

Mediante sentencia de 26 de octubre de 2021, la Sala cognoscente del asunto declaró la improcedencia de la acción de tutela por considerar que *«la sola expedición de la lista de elegibles, sin que se haya proferido un acto administrativo de nombramiento y desvinculación, no constituye una amenaza cierta de vulneración a los derechos fundamentales, ni de quien aspira a ser nombrado en propiedad, ni de quien lo ejerce en provisionalidad»*, pues en la actualidad aun ejerce el cargo en provisionalidad, sin haber sido desvinculado y pese a que ya existe una lista de elegibles, esto *«no significa que los derechos fundamentales del ciudadano se encuentren quebrantados o en amenaza de vulneración»*.

III. IMPUGNACIÓN

En desacuerdo con el fallo en comentario, el aquí accionante lo impugnó, insistió en sus planteamientos iniciales y cuestionó que su historia clínica adjuntada no fuera objeto de valoración.

IV. CONSIDERACIONES

El amparo constitucional es un derecho superior que puede ser utilizado por cualquier persona, para garantizar sus prerrogativas fundamentales o para impedir una lesión injustificada que bien puede proceder de las autoridades públicas o privadas.

Además del contenido del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, su desarrollo ha provenido de la jurisprudencia, especialmente de los órganos límite de cada una de las jurisdicciones, en las que se ha establecido una doctrina de protección en todos los ámbitos y de esa manera ha permitido la realización de los propios valores y principios en los que se instala el Estado Social de Derecho.

Para esta Sala de la Corte, es imperioso observar que no obstante la sumariedad del trámite de tutela, su desarrollo no escapa a las garantías constitucionales de todo proceso judicial. Si este se ha surtido de una forma diferente a las disposiciones legales que estudian sobre el conocimiento de la materia, quienes cuentan con el criterio respecto a la especialidad que se debata, para resolver los asuntos que se gestionan por parte de los usuarios del órgano judicial.

En línea con los anteriores derroteros, es preciso indicar, que la presente acción constitucional fue admitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante auto de 21 de octubre de 2021, proveído en el que se ordenó notificar a las entidades accionadas y se dispuso la vinculación del Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, para luego, darle trámite al asunto el cual concluyó con fallo de 26 de octubre de 2021.

Sin embargo, denótese que el juez constitucional de primer grado pasó por alto que quien formuló la acción de tutela, en la actualidad ostenta la calidad de empleado de la jurisdicción ordinaria, en tanto ejerce como *«citador en el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín desde el año 2014»*.

Asimismo, por vía de tutela pretende que se conceda la protección de sus garantías superiores *«especialmente el de la seguridad social integral, y la estabilidad laboral reforzada»*, en el sentido de permitirle conservar el cargo que ocupa en provisionalidad *«[...] hasta tanto se obtenga un diagnóstico definitivo de [sus] patologías físicas y sensoriales, y se tramite el proceso de calificación de la pérdida definitiva de capacidad laboral»*.

Con lo dicho, para significar que esta Sala no es la competente para conocer el asunto, pues queda en evidencia que la autoridad competente para definir la controversia es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, dado que la accionada es: *i)* la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y, por otro lado, en atención a *ii)* la calidad de empleado de la jurisdicción ordinaria del actor.

Esto, conforme lo prevé el inciso segundo del numeral 8.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, que establece lo siguiente:

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o

pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. Se resalta

En virtud de lo anterior, se hace necesario invalidar la actuación surtida, a partir del proveído de fecha 21 de octubre de 2021, inclusive, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual se admitió este recurso de amparo, para en su lugar, ordenar la inmediata remisión del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, por ser esta autoridad la competente para conocer el asunto en primera instancia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado, a partir del auto admisorio de 21 de octubre de

2021, inclusive, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, por las razones indicadas en precedencia, dejando a salvo las pruebas que reposan en el plenario, en los términos del artículo 138 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: REMITIR, por competencia, la presente acción de tutela al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, al cual compete el conocimiento del asunto en primera instancia, en atención a las reglas de reparto dispuestas en el inciso segundo del numeral 8º, artículo 1 del Decreto 333 de 2021, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia.

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a los interesados y a los intervinientes, en la forma prevista en los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.



OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'F' at the beginning and several loops and strokes throughout.

FERNANDO CASTILLO CADENA



LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ



IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Salvo voto

No firma por ausencia justificada

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN